

Teim



Análisis del observatorio electoral TEIM

ANÁLISIS EVENTUAL:

MARRUECOS / La gestión del régimen y las perspectivas de continuidad de las protestas

Irene Fernández Molina

Fecha de publicación: 4 de marzo de 2011

Observatorio Electoral

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos
Universidad Autónoma de Madrid

www.observatorioelectoral.es

www.opemam.org

ISSN: en trámite

www.observatorioelectoral.es

Las movilizaciones del 20 de febrero por el cambio político en Marruecos no han tenido todo el éxito de convocatoria esperado por sus promotores. Éstos insisten en presentarlas, no obstante, como un simple punto de partida o primer ensayo de un proceso sin precedentes todavía abierto. Por lo pronto, han desencadenado un ciclo de protestas coordinadas en la mayoría de las ciudades del país, que, sin dejar de ser minoritarias, no han perdido fuelle en las dos semanas posteriores, tienen perspectivas de continuidad y han obligado a mover ficha al régimen y el conjunto de las fuerzas políticas institucionalizadas. La novedad del ciclo de contestación actual reside tanto en el contenido como en la escala geográfica. En este país han abundado las movilizaciones locales de origen socioeconómico a lo largo de la última década, la mayoría en ciudades medianas o pequeñas más o menos periféricas, pero sin tomar hasta ahora una coloración tan abiertamente política y, sobre todo, sin organizarse de forma coordinada a escala nacional y dirigirse expresamente a la transformación del marco estatal.

Los jóvenes del flamante Movimiento 20 de Febrero, respaldado por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la Red Democrática Marroquí de Solidaridad con los Pueblos, habían llamado para ese día a una jornada de protesta pacífica y unitaria en la que se mezclaban las reivindicaciones de carácter socioeconómico —contra la carestía de los productos básicos, el bajo nivel de los salarios, la pobreza y la exclusión, la corrupción omnipresente y la *hogra*, por la dignidad y la justicia, el trabajo, la vivienda, los derechos sociales, la enseñanza gratuita— con otras plenamente políticas: “Queremos una constitución democrática, el fin de la impunidad de los responsables que cometen abusos de poder y se benefician de las riquezas de este país. Queremos un gobierno que sirva a nuestros intereses y un parlamento que nos represente”, se afirmaba en uno de sus vídeos difundidos por internet.

Estas aspiraciones exigían a su entender una reforma constitucional profunda que permitiese construir un verdadero Estado de derecho y una monarquía parlamentaria. Recibieron la adhesión inmediata de numerosas organizaciones no gubernamentales, empezando por las de defensa de los derechos humanos, cuatro pequeños partidos políticos de la izquierda más crítica, las juventudes de estas y otras formaciones —también de algunas integradas en la coalición de Gobierno, en contra de la decisión de sus cúpulas—, varios sindicatos, la poderosa asociación islamista Al Adl wal Ihsán¹, buena parte del movimiento amazig, muchas de las coordinadoras (*tansikiyat*) locales surgidas a raíz de las protestas socioeconómicas de los últimos años y hasta algún gran empresario de renombre.

En su balance posterior, los promotores de las manifestaciones hablaron de un total de 240.000 o incluso 300.000 participantes en más de 50 ciudades del país, cifras que contrastan netamente con la estimación de 37.000 personas avanzada por el Ministerio del Interior². La marcha de Rabat congregó a cerca de 16.000 personas según la organización (3.000 según las fuerzas de orden público). Más allá de la inevitable guerra de cifras, y en comparación con las movilizaciones de otros países de la región, es evidente que la respuesta de la población marroquí no fue masiva. ¿Por qué de nuevo esta aparente *excepción marroquí*? Los convocantes se apresuraron a recordar el mal tiempo y la lluvia presente en la mayoría de las ciudades durante toda la jornada. Otros destacaron como *handicap* la dispersión geográfica de las protestas. Entre otras

¹ No obstante, a tenor de lo observado en las manifestaciones, esta organización parece haber optado por mantener un perfil bajo.

² Una estimación independiente (web Mamfakinch) habla de cerca de 123.000 personas.

cosas, por sus propias características sociodemográficas, una capital mediana y apacible como Rabat (650.000 habitantes) difícilmente podría congregarse a multitudes comparables a las de El Cairo —más aún si se dificultan los accesos desde las localidades vecinas—.

En cualquier caso, hay que reconocer que la capacidad de convocatoria de los promotores de estas manifestaciones sólo fue moderada, en parte por las limitaciones de su propio discurso, en parte por la sagaz gestión del régimen, que le permitió salir airoso del trance. Por un lado, al no estar en el punto de mira la monarquía ni la persona de Mohamed VI, la ausencia de una figura emblemática en la que focalizar el descontento popular resta fuerza movilizadora en comparación con las protestas de Túnez, Egipto o Libia, dirigidas en primer término a la caída de los respectivos jefes de Estado. El objetivo inmediato o mínimo común denominador que aglutina a los heterogéneos sectores movilizadores se vuelve así más difuso. ¿A quién responsabilizar de entrada de todos los males que aquejan al país? ¿Al Gobierno? ¿Al primer ministro, Abás al Fasi, y su “clan”, que acapara numerosos puestos de relieve en el Ejecutivo y las empresas públicas? ¿Al boyante Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado en 2008 por el “amigo del rey”, Fuad Ali al Himma? ¿Al Parlamento? ¿Al entorno directo del rey? ¿Al inefable *majzén*? Todos ellos estuvieron presentes en los eslóganes y las pancartas de los manifestantes: todos (y ninguno) eran culpables. Su función de válvulas de seguridad del sistema político quedó una vez más en evidencia.

Por su parte, el régimen gestionó hábilmente las protestas, valiéndose tanto de las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Túnez, Egipto o Libia como de algunos elementos característicos de la cultura política nacional. Aunque sin renunciar totalmente al uso del *palo* (las medidas propiamente represivas), su estrategia pasó por dar prioridad a la *zanahoria* (la concertación y la negociación con los distintos actores en juego). Sobre todo, se cuidó muy bien de dar credibilidad al discurso de la *excepción marroquí* y no caer en la espiral observada en otros países, donde la represión violenta y la contestación en las calles se han alimentado mutuamente hasta traspasar un punto de no retorno. El contraste, en los mismos días, con el comportamiento atroz del régimen libio puso aún más de relieve las diferencias.

Entre las acciones preventivas destinadas a desactivar las movilizaciones destacaron los anuncios de medidas socioeconómicas (aumento de las subvenciones a los productos alimenticios básicos y el combustible, subidas de sueldo a algunos funcionarios, creación de puestos de trabajo para diplomados en paro, entrada en vigor del seguro médico obligatorio y ampliación de la asistencia sanitaria gratuita, establecimiento de un subsidio de desempleo) y los contactos mantenidos en los días previos al 20 de febrero con distintos actores políticos relevantes.

Para empezar, las reuniones del primer ministro y el ministro del Interior con los líderes de los principales partidos políticos con representación parlamentaria cortaron de raíz cualquier tentación de subirse al carro del movimiento de protesta en ciernes, pese a las demandas de parte de sus bases. Algunas formaciones, como la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), optaron entonces por mantener un compás de espera y permanecer por el momento en silencio. Otras, como el Partido del Istiqlal (PI) o el PAM, actuaron como repetidores de la consigna oficial de que, pese a la legitimidad de las reivindicaciones expresadas, “Marruecos no es Argelia ni Egipto ni Túnez”. El Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) o el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) fueron los que más dejaron entrever desde el principio sus

tensiones y divergencias internas. A cambio de su colaboración, este último partido habría obtenido la liberación inmediata de Yamaa al Moatasim, un miembro de su dirección procesado por un caso de corrupción y en prisión provisional desde enero.

Además de los partidos, el Ministerio del Interior también mantuvo encuentros con representantes de cuatro sindicatos —para tratar poner fin a las huelgas del sector público y retomar el diálogo social— y las principales asociaciones de diplomados en paro. Con estas últimas se alcanzó un acuerdo para la integración en la función pública de parte de sus miembros a condición de que detuvieran sus habituales protestas hasta el 1 de marzo. Finalmente, en la víspera del 20 de febrero se les pidió también a la AMDH y el Foro Marroquí Verdad y Justicia (FMVJ) que contribuyeran al “buen desarrollo” de las manifestaciones: una forma de responsabilizar a estas *viejas conocidas* de las autoridades de cualquier posible desorden, incidente o acto de vandalismo. En general, tras todas estas iniciativas de diálogo y concertación contra reloj subyacían dos prácticas clásicas del juego político marroquí: la tendencia al consenso y la negociación permanente entre los actores (menor predisposición a la confrontación directa), y el fomento por parte del régimen de las divisiones entre las distintas fuerzas políticas (también en el seno de cada una de ellas).

Paralelamente, en el ámbito de la comunicación, los medios afines al régimen llevaban a cabo una intensa campaña para desacreditar a los promotores de las protestas, acusándolos, entre otras cosas, de servir a objetivos externos o a los “enemigos de la integridad territorial” (en referencia al conflicto del Sáhara Occidental). Las redes sociales de internet se inundaron de llamamientos al boicot de las manifestaciones. Y la agencia oficial MAP llegó a difundir el día anterior la noticia falsa de la anulación de la convocatoria. Entre las prácticas más puramente represivas deben contarse las típicas operaciones de acoso e intimidación denunciadas por militantes de las organizaciones implicadas y, en particular, por los jóvenes líderes más destacados del Movimiento 20 de Febrero: llamadas telefónicas anónimas, detenciones (breves) e interrogatorios, presiones a familiares, pirateo de cuentas de correo electrónico o redes sociales. A esto se sumó el despliegue de fuerzas de seguridad en torno a distintas universidades y zonas de residencia de estudiantes.

El mismo día 20 de febrero se constataron obstáculos para el acceso a Rabat desde Casablanca (trenes cortados) y la vecina Salé (controles y circulación restringida en el puente). El despliegue policial, sin embargo, no resultó particularmente visible, ya que, al menos en la capital, buena parte de los agentes que controlaban las manifestaciones vestían de paisano. En el transcurso de esta marcha y la de Casablanca quedó claro que las fuerzas del orden habían recibido la consigna de evitar cualquier intervención violenta. Esto permitiría al ministro del Interior declarar al día siguiente que las protestas se habían desarrollado en “un clima pacífico marcado por la serenidad y la disciplina”, gracias a la “práctica democrática” y el “derecho a la libertad de expresión” existente en Marruecos.

El desorden fue mayor en otras ciudades más periféricas, algunas de ellas con sonados antecedentes de protestas y conflictos locales en años recientes. Los disturbios más graves tuvieron lugar en Alhucemas y se saldaron con cinco muertos. Pero también en otros puntos del norte (Tánger, Tetuán, Larache, Chefchauen), el centro (Sefru, Marrakech) y el sur (Guelmim) del país se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales y actos de vandalismo, prolongados en algunos casos durante los días posteriores. El

resultado de estos primeros incidentes fue el procesamiento de más de 200 personas, además de innumerables detenciones.

Con todo, la tónica general del 20 de febrero marroquí fue de ausencia de represión violenta, a diferencia de lo ocurrido en protestas recientes de otros países de la región. Esto no deja de tener, en cualquier caso, efectos paradójicos, como ha escrito el príncipe Mulay Hicham en *Le Monde* (23/2/2011): “El hecho de que no haya habido derramamiento de sangre ha generado una curiosa incertidumbre por los dos lados, una especie de situación de ‘doble limitación [*contrainte*]’ que parece favorable a ambas partes. Para el movimiento, la ausencia de confrontación violenta y de reivindicaciones radicales contribuye a legitimar la protesta y podría incitar a otros marroquíes a apoyarla o implicarse en ella; pero esto podría ser percibido como un signo de debilidad. Para el régimen, haber evitado una represión brutal es algo que lo honra, pero podría también dinamizar al movimiento y contribuir a amplificarlo. Ninguna de las partes debería subestimar la complejidad del paso a dos [*pas de deux*] en el que están ahora metidas”.

El nivel de represión iría en aumento en los días posteriores, a medida que se constataba la determinación de los Jóvenes del 20 de Febrero y demás actores de no cejar en sus reivindicaciones y mantener viva la llama de las protestas. En las dos semanas transcurridas desde entonces se han repetido las manifestaciones en todos los puntos del país, concentradas sobre todo en los fines de semana (26-27 de febrero y 5-6 de marzo), pero surgidas también de forma cotidiana y dispersa. A esto se suman los actos de solidaridad con el pueblo libio y algunos altercados entre estudiantes y fuerzas del orden en ciudades universitarias (Fez, Marrakech, Agadir). Aun siendo minoritarias, la policía no ha evitado la tentación de dispersar estas concentraciones por la fuerza en distintas ocasiones con el argumento de que no estaban autorizadas, dando lugar a enfrentamientos violentos y numerosas detenciones en ciudades como Agadir, Jemiset, Marraquech, Meknes, Fez, Kenitra, Larache, Safi o Guelmim. En Rabat, la intervención más desmedida fue la que se produjo contra la concentración organizada el 21 de febrero por los mismos convocantes de las movilizaciones de la víspera, en la que resultaron heridos, entre otros, la presidenta y varios militantes de la AMDH. Esta última asociación ha sido objeto de un acoso particular en estos días, incluido el allanamiento nocturno de su sede central por parte de desconocidos.

¿Qué perspectivas de continuidad tienen las protestas antiautoritarias en Marruecos? Por lo pronto, ya hay convocada otra gran jornada de movilizaciones a escala nacional para el domingo 20 de marzo y se ha puesto en marcha un Consejo Nacional de Apoyo al Movimiento del 20 de Febrero con el fin de coordinar la acción de todas las organizaciones implicadas —aunque respetando la iniciativa y el protagonismo de los jóvenes—, así como los correspondientes comités locales. Entre tanto, para ponderar la capacidad de convocatoria y resistencia al desgaste de los actores implicados, habrá que seguir atentos a las respuestas políticas del régimen (lanzamiento del Consejo Económico y Social, nuevas consultas con los partidos y los sindicatos, plan de lucha anticorrupción, contratación de diplomados en paro, posible remodelación del Gobierno) y las reacciones, dilemas y tensiones internas de las fuerzas políticas institucionalizadas. Para salvar su ya escasa legitimidad, sin excepción, éstas se han visto obligadas a mover ficha y pronunciarse sobre las demandas de reforma constitucional e instauración de una monarquía parlamentaria.